Entrevista completa sobre desapariciones violentas en Tamaulipas, realizada por correo el 13 de agosto de 2019. Publicada casi íntegramente en el reportaje "Tamaulipas, entre el silencio y la muerte", en la web de la *Organización Nacional Anticorrupción* (ONEA México), el 23 de agosto de 2019. Entrevistador: Salvador Vega.

-Existe un fenómeno de violencia que se vive de forma general en el país por el crimen organizado y que impacta de forma particular a las fronteras del territorio. Sin embargo, en Tamaulipas, desde hace al menos siete años, la crisis de desapariciones se concentró. Dr. Jesús Pérez Caballero, en su consideración, ¿qué elementos han contribuido para que estos delitos se sigan presentando y cómo han cambiado la dinámica social de los habitantes de la entidad?

En primer lugar habría que concretar a qué tipo de desaparición violenta se refiere. Si nos referimos a la desaparición forzada, es probable que el hueco, o al menos el hiato entre la ciudadanía, por un lado, que son quienes viven en el día a día en colonias y demás ámbitos locales, y la policía estatal, ejército y marina, por otro, coadyuve a que se produzcan delitos tan graves como esas desapariciones. No me refiero a un hiato emocional, pues es indudable el apoyo de la población a esos cuerpos de seguridad. Me refiero a la imposibilidad material de que hagan labores policiales, como una investigación expedita cuando nos topamos con ese delito. Por otro lado, si nos referimos a las desapariciones cometidas por particulares vinculados a macro estructuras mixtas (públicas y privadas) que de modo esquemático llamamos "organizaciones criminales", entonces ahí entran los conflictos coyunturales u otros endémicos, sea internos –por ejemplo, para mantener el orden en un espacio, dentro de la organización y demás- o por recursos. Estos afectan a los individuos considerados como parte de estas, sea por una vinculación verosímil o por una alusión desproporcionada (por ejemplo, la estigmatización a un familiar del tachado como criminal, un vecino, alguien que se acercó a un sitio que se volvió peligroso).

Lo descrito persiste en Tamaulipas, puesto que implica circunstancias transexenales y se relacionan con aspectos económicos, sociales, etcétera, y es seguro que la Guardia Nacional, si se acomoda a las dinámicas federales o estatales, podrá hacer poco ante ello.

Respecto a los cambios en la dinámica social, habría que ver por municipio tamaulipeco y por tipo de desaparición violenta, porque cada uno de ellos genera sus permutaciones

y las combinaciones lesivas son demasiadas. Por ejemplo, un “levantón” en una central camionera por unos individuos que, armados, piden identificación buscando quién sabe si migrantes; tener un rancho en el lugar equivocado; o un patrullaje urbano que termina en detención, tortura y una muerte inesperada, pero que obliga a deshacerse del cadáver… Son todos ellos hechos de naturaleza distinta que necesitan de mayores análisis.

Pero para no caer en la casuística –creo que ese es el peligro de ver solo lo local- podríamos decir que, en general, se han modificado hábitos normales, como los traslados por carretera entre municipios o el hacer vida en horario nocturno en espacios públicos. Que es como decir que se espera poco o nada de las fuerzas de seguridad en el ámbito de la colonia, en el día a día, por lo que, salvo que un hecho extremadamente violento necesite cesar de inmediato, la población tendemos a la resignación de la autoprotección y a blindarnos en la vida cotidiana, de tal modo que se reduzca la probabilidad de ser parte de alguna de las dinámicas mencionadas.

- Desde la observación que han realizado en el Colef, (y si se pudieran definir en tres), ¿cuáles son las principales actividades que realiza el crimen organizado en la entidad que la distinguen de los grupos que se concentran en el centro del país?

Más que actividades yo lo enfocaría en factores que influyen en la naturaleza de las organizaciones de por acá. En primer lugar, y hablando en términos más generales, la misma amplitud territorial del estado tamaulipeco y su escasa población. Esto supone consecuencias para el tipo de política que se construye, y los problemas aparejados en términos sociales, de seguridad, urbanos, etcétera. A las oportunidades obvias de tener territorios para entrenamiento, casas de seguridad o bandidaje, o entornos rurales semi abandonados o desprotegidos, se añade la intermitencia de la población para exigir contención y la tibieza en la estigmatización de las conductas más dañosas.

En segundo lugar, los recursos de esas macroestructuras públicas y privadas al haber incorporado la frontera con EEUU de modo simbiótico. No solo en un nivel económico (podría verse a ciertas elites locales y regionales enriquecidas por el tráfico *legal* transfronterizo como cinta de Moebius de elites locales y regionales enriquecidas por el tráfico *ilegal* transfronterizo), sino a nivel físico. Quiero decir, terrenos federales limítrofes con EEUU ocupados sin problemas por individuos, redes de contrabando de migrantes transexenales o el conocimiento de quienes son los habitantes del lugar (a

diferencia de los turnos rotatorios de los militares o la lejanía de la policía estatal). Todo eso da una fortaleza estructural, no coyuntural.

En tercer lugar, el tipo de grupos criminales que pervive, con remanentes de una perspectiva militar que, supongo, habrán acumulado experiencia de los diferentes conflictos a los que han sobrevivido. A ello incorporan una visión de sí mismos, por así decirlo, "autóctona", derivada del conocimiento del terreno que le he mencionado. No les falta razón, porque sea por la presencia en colonias populares o por la capacidad de coexistir con las elites históricas, su pervivencia como grupos criminales armados no está en duda.

En todo caso, esos factores no significan una separación siempre clara entre grupos del noreste y otros del centro. Por ejemplo, muchas partes del centro son precisamente lugares de almacenamiento para los grupos de la frontera o las redes de trata o migración necesitan a esas dos partes de la república, por no decir que algunos de los grupos criminales nororientales tienen una marcada presencia de personas del centro y del sur del país.

A su vez, lo que estas consideraciones tengan que ver con las desapariciones violentas ya depende de qué ángulo se quiera enfatizar. Lo dicho, depende de si es una desaparición forzada; cometida por particulares; desconocida pero que implica un "levantón"; un secuestro económico o político; la privación ilegal de libertad que termina en la muerte en un baldío o en una brecha tras el interrogatorio, etcétera.

- En su consideración, ¿qué tan involucradas están las autoridades municipales, o qué tanta responsabilidad tienen en el fenómeno de desapariciones? ¿Han cambiado las políticas públicas para la búsqueda o protección de personas en la entidad o ha imperado el silencio y la impunidad?

Como muestran los hechos más graves ocurridos en Tamaulipas, las autoridades municipales –al menos las policiales- han sido parte del problema, sea por dolo, negligencia o incapacidad. Respecto a otros niveles de seguridad o a las civiles, habría que puntualizar, pero no es descabellado sostener que muchos individuos eran o son tronco o rama del crimen organizado. No hay líneas divisorias tajantes al respecto, sino matices continuos y cambiantes.

Sobre la política de seguridad, hoy por hoy se está en el mando único policial, por lo que la seguridad la proporciona la policía estatal, y hay también patrullaje de la policía

federal (que será sustituida por la Guardia Nacional) y el ejército. Preferentemente, se confía en la disuasión y, sobre todo, en una especie de reparto de funciones condicionado a buscar, sobre todo, la tranquilidad del lugar. Para ello, se intentan acotar los delitos más graves a quienes implementan la ley o quienes buscan sustraerse a ellas, que por una causa u otra asumen en sus salarios esos peligros. Así, son endémicos los operativos con uso excesivo de la fuerza, las balaceras, la tortura o las privaciones ilegales de la libertad. Es probable que todo esto se deba al temor a que lo que venga pueda ser peor (recuerde que el último gran intento de cambiar el statu quo en Tamaulipas, entre un grupo criminal y quienes fungían como sus pistoleros, sí fue a peor). Pero ello resulta también en que se esclerotizan dinámicas de enfrentamientos, fijadas únicamente en que el resultado sea un poco mejor que el anterior (una muerte de un líder por aquí, discordia entre aliados por allá, en esa línea) y en intentar describirlo de tal modo que encaje en las estadísticas oficiales.

Por supuesto que hay políticas para intentar mejorar; siempre las hay. Si, por ejemplo, nos fijamos en los movimientos de víctimas, están en un continuo ensamblaje con los mecanismos legales, que intentan aplacarlas. Eso es loable, pero dependiente de su grado de movilización y cabildeo. De repente aparece un juez en Reynosa que argumenta para la creación de una comisión de la verdad para Ayotzinapa, pero causa más estupefacción que alivio, pues el sistema procesal mexicano tiene aún mucho de enigmático. En fin, a veces se ponen bases para cambios, unos son graduales y firmes, otros rápidos sin saber muy bien por qué, otros suponen el regreso al punto de partida en peores condiciones.

Sólo querría añadir, para acabar, que hay unos cuántos presupuestos sobre las desapariciones violentas sobre los que no tenemos claridad. Por ejemplo, para lanzar algunas ideas, hay que tener en cuenta que orientar estratégicamente las instituciones claves para que cesen o se prevengan las desapariciones forzadas requiere comprender la informalidad de las instituciones de seguridad, así como lograr la flexibilidad suficiente para rectificar en los mismos tiempos que esas macroestructuras, pero sin vengarse con otro delito. Igualmente, para analizar las desapariciones cometidas por particulares es básico no solo analizar las pautas de cómo se convencen a sí mismos quienes las promueven o las ejecutan, sino cómo sus familiares o vecinos toleran esas acciones.